



César Augusto Lorduy Maldonado
Representante a la Cámara por el Dpto. del Atlántico

PROPOSICIÓN

Adiciónese un artículo Nuevo al Proyecto de Ley número 122 de 2020 Cámara y 161 de 2020 Senado “Por medio del cual se impulsa el emprendimiento en Colombia”, el cual quedara así:

ARTÍCULO NUEVO. Facilidades para el emprendimiento. Con el fin de generar sinergias, facilidades y alivios a los emprendedores, a partir del 1 de enero de 2022, la Superintendencia de Sociedades ejercerá las competencias asignadas por la Ley a la Superintendencia de Industria y Comercio para la inspección, vigilancia y control de las cámaras de comercio, así como las previstas en los artículos 27, 37 y 94 del Código de Comercio respecto del registro mercantil, el ejercicio profesional del comercio y la apelación de los actos de registro. Desde dicha fecha, la mención realizada en cualquier norma jurídica a esta última superintendencia como autoridad de supervisión o superior jerárquico de las cámaras de comercio se entenderá referida a la Superintendencia de Sociedades.

El Gobierno nacional garantizará los recursos técnicos, administrativos, financieros y humanos para el traslado de tales funciones y establecerá la tarifa o contribución que por concepto del servicio administrativo de supervisión deberán pagar las cámaras de comercio a la Superintendencia de Sociedades, de conformidad con los recursos necesarios para tal fin y su presupuesto, la cual será recaudada por la Superintendencia de Sociedades.

El Gobierno nacional reglamentará todo lo concerniente a este artículo.

Cordialmente,

CÉSAR AUGUSTO LORDUY MALDONADO
Representante a la Cámara
Departamento del Atlántico

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Cra 7 No. 8-68 Edificio Nuevo del Congreso. Oficina 419-420 Teléfono: 4325100 Ext. 3455 - 3456

Email: clorduym@gmail.com - cesar.lorduy@camara.gov.co



Cesar Lorduy



@clorduy



@clorduym



César Augusto Lorduy Maldonado
Representante a la Cámara por el Dpto. del Atlántico

JUSTIFICACIÓN

Según lo establecido por el artículo 78 del Código de Comercio, las Cámaras de Comercio son instituciones de orden legal con personería jurídica, creadas y autorizadas mediante acto administrativo por el Gobierno Nacional, bien sea de oficio o a petición de los comerciantes del territorio donde vayan a funcionar, y se encuentran representadas por sus presidentes.

En la Sentencia C-135 de 2016 de la Corte Constitucional, se define a las Cámaras de Comercio como personas jurídicas de derecho privado, de naturaleza corporativa, gremial y sin ánimo de lucro, las cuales se encuentran integradas por los comerciantes afiliados en el registro mercantil y que por disposición de la ley ejercen funciones públicas mediante la figura de descentralización por colaboración¹. En ese sentido, se destaca que a partir del artículo 210 de la Carta Política, se autoriza para que los particulares cumplan funciones administrativas en las condiciones que señale el Legislador, de acuerdo con los principios de igualdad, moralidad, economía, celeridad, eficacia, publicidad e imparcialidad, sin afectarse la naturaleza jurídica de la persona o institución a quien se ha delegado el ejercicio de funciones públicas.

Es decir, las personas jurídicas de derecho privado, como las Cámaras de Comercio, cuando se les otorga la facultad de ejercer funciones administrativas, si bien se conserva incólume su condición de sujeto particular sometido al régimen de derecho privado en lo que atañe a su organización y al desarrollo de las actividades relacionadas con su finalidad; también están sometidas a la disciplina del derecho público, la cual viene dada por el ejercicio de funciones públicas que desarrolle con ocasión a la administración del registro mercantil y las demás actividades delegadas de conformidad con la ley, en específico a la responsabilidad que esto impone.

Particularmente, el artículo 86 del Código de Comercio señala las funciones que les compete ejercer a las Cámaras de Comercio, correspondiendo, entre otras, llevar el registro mercantil y certificar sobre los actos y documentos inscritos en él; también tienen como función defender y estimular los intereses generales del empresario en Colombia. Empero, el Legislador les ha asignado otras funciones, entre las cuales se encuentran las de: (i) llevar los registros mercantiles de las entidades sin ánimo

¹ Sentencia C-1051 de 2001. Corte Constitucional. “La descentralización por colaboración se presenta cuando personas privadas ejercen funciones administrativas (art. 123 inciso 3º C.P.), v. gr. las Cámaras de Comercio y la Federación Nacional de Cafeteros (...)”

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Cra 7 No. 8-68 Edificio Nuevo del Congreso. Oficina 419-420 Teléfono: 4325100 Ext. 3455 - 3456

Email: clorduym@gmail.com - cesar.lorduy@camara.gov.co



Cesar Lorduy



@clorduy



@clorduym

de lucro², (ii) el registro único de proponentes delegados legalmente³; (iii) el registro único empresarial de las MIPYMES⁴; (iv) emitir dictamen pericial antes de celebrarse un contrato de arrendamiento de un inmueble destinado a despachos judiciales y otras oficinas públicas⁵; (v) llevar el depósito de los estados financieros de propósito general, junto con sus notas y el dictamen correspondiente, si lo hubieren⁶; (vi) designar peritos de las listas integradas por expertos en cada una de estas materias⁷; (vii) financiación de programas de desarrollo empresarial⁸; (viii) solicitar la expedición del Número de Identificación Tributaria NIT al matriculado en la oficina de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales que sea competente, con el objetivo de incorporar, dicha identificación a la matrícula mercantil.⁹

Entendiéndose que dichos órganos camerales ejercen funciones públicas de carácter registral, a partir del Decreto Ley 019 de 2012 se delegó la administración de los siguientes registros: el registro nacional de turismo, el registro de todas las entidades de la economía solidaria, el registro de veedurías ciudadanas, el registro nacional de vendedores de juegos de suerte y azar, y el registro de entidades privadas extranjeras sin ánimo de lucro. Tales registros integrados y que administran las Cámaras de Comercio, se conocen como Registro Único Empresarial y Social (RUES)¹⁰. Así mismo, se les ha otorgado funciones especiales según lo indicado por el artículo 116 de la Constitución Política, en lo que tiene que

² Artículo 40 del Decreto 2150 de 1995

³ Artículo 22 de la Ley 80 de 1993.

⁴ Artículo 11 de la Ley 590 de 2000.

⁵ Artículo 1 Decreto 2131 de 1990.

⁶ Artículo 41 de la Ley 222 de 1995.

⁷ Artículo 231 de la Ley 222 de 1995.

⁸ Artículo 23 de la Ley 905 de 2004.

⁹ Artículo 79 de la Ley 788 de 2002.

¹⁰ Corte Constitucional. Sentencia C-235 de 2014. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo “Al Registro Único Empresarial (RUE) de que trata el artículo 11 de la Ley 590 de 2000, que integró el Registro Mercantil y el Registro Único de Proponentes, se incorporarán e integrarán las operaciones del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro creado por el Decreto 2150 de 1995, del Registro Nacional Público de las personas naturales y jurídicas que ejerzan la actividad de vendedores de Juegos de Suerte y Azar de que trata la Ley 643 de 2001, del Registro Público de Veedurías Ciudadanas de que trata la Ley 850 de 2003, del Registro Nacional de Turismo de que trata la Ley 1101 de 2006, del Registro de Entidades Extranjeras de Derecho Privado sin Ánimo de Lucro con domicilio en el exterior que establezcan negocios permanentes en Colombia de que trata el Decreto 2893 de 2011, Y del Registro de la Economía Solidaria de que trata la Ley 454 de 1998, que en lo sucesivo se denominará Registro Único Empresarial y Social -RUES-, el cual será administrado por las Cámaras de Comercio atendiendo a criterios de eficiencia, economía y buena fe, para brindar al Estado, a la sociedad en general, a los empresarios, a los contratistas, a las entidades de economía solidaria y a las entidades sin ánimo de lucro una herramienta confiable de información unificada tanto en el orden nacional como en el internacional.”



César Augusto Lorduy Maldonado
Representante a la Cámara por el Dpto. del Atlántico

ver con facultades de carácter jurisdiccional, que se ven configuradas en los centros de conciliación y arbitraje en los cuales se realiza el servicio de administración de justicia.

Luego entonces, puede observarse que dentro de las principales funciones que ejercen las Cámaras de Comercio, se encuentran las de promover los intereses de los empresarios junto con el desarrollo de sus actividades, llevar los registros inherentes a distintos emprendimientos que tiene una especial incidencia en el sector societario en Colombia y hacer efectivas diversas medidas en búsqueda de aumentar la competitividad empresarial en el país. En ese orden de ideas, cabe precisar que, en tanto la Superintendencia de Sociedades ejerce la inspección, vigilancia y control de las sociedades del país y dado que, el registro de actividades de éstas últimas (que es adelantado por la Cámaras de Comercio) se constituyen en un instrumento a través del cual se garantiza el principio de publicidad de los actos que llevan a cabo, por cuestiones de especialidad y eficiencia resulta necesario reorganizar las competencias que son ejercidas por el Estado, a efectos de lograr que a través de una autoridad administrativa con una perspectiva más cercana al sector empresarial y societario, adelante dichas labores con mayor eficiencia y celeridad.

En orden de lo expuesto, es necesario recordar que las actividades de inspección, vigilancia y control de las superintendencias se ejercen dentro de una esfera funcional de determinados sectores sociales o económicos que interactúan con los organismos de sistemas administrativos concretos dentro de la organización de la administración pública. Según la conveniencia técnica y funcional de cada sector, el ejercicio de la inspección, vigilancia y control, es dinámico en la estructura de la administración. En ese sentido la doctrina ha expresado respecto de las actividades desarrolladas por las superintendencias que por lo general, dichas funciones estuvieron ubicadas originalmente en las competencias propias de los Ministerios pero por un “*movimiento centrífugo*” han adquirido mayor relevancia, tendiendo a la descentralización y autonomía.¹¹

Ahora bien, es de resaltar que el grado de autonomía y las funciones específicas de inspección y vigilancia se determinan por la ley de creación, según los artículos 66 y 82 de la Ley 489 de 1998, sin perder de vista que esto también puede derivar de las funciones que le corresponden al Presidente de la República en atención a lo dispuesto en el artículo 189 de la Carta Política¹². En ese orden de ideas, resulta

¹¹ Cfr. Jaime Vidal Perdomo. Derecho Administrativo. ED. Temis. Bogotá, 1972. Pg. 66.

¹² Cfr. Libardo Rodríguez. Derecho Administrativo General y Colombiano. Ed. Temis. Bogotá, 2011. Pg. 108.

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Cra 7 No. 8-68 Edificio Nuevo del Congreso. Oficina 419-420 Teléfono: 4325100 Ext. 3455 - 3456

Email: clorduym@gmail.com - cesar.lorduy@camara.gov.co



Cesar Lorduy



@clorduy



@clorduym

pertinente observar los conceptos de inspección, vigilancia y control, que pese a no estar definidos de manera específica por el Legislador, dentro del ordenamiento jurídico colombiano se encuentran diferentes disposiciones que hacen alusión a este tipo de competencias, así como a facultades con las que cuentan las entidades que tienen a su cargo estas labores. A partir de esto, la Corte Constitucional ha indicado a qué se refieren estas instituciones jurídicas señalando que:

“Las funciones de inspección, vigilancia y control se caracterizan por lo siguiente: (i) la función de inspección se relaciona con la posibilidad de solicitar y/o verificar información o documentos en poder de las entidades sujetas a control, (ii) la vigilancia alude al seguimiento y evaluación de las actividades de la autoridad vigilada, y (iii) el control en estricto sentido se refiere a la posibilidad del ente que ejerce la función de ordenar correctivos, que pueden llevar hasta la revocatoria de la decisión del controlado y la imposición de sanciones.

Como se puede apreciar, la inspección y la vigilancia podrían clasificarse como mecanismos leves o intermedios de control, cuya finalidad es detectar irregularidades en la prestación de un servicio, mientras el control conlleva el poder de adoptar correctivos, es decir, de incidir directamente en las decisiones del ente sujeto a control”¹³.

En concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado del 16 de abril de 2015 (Radicado número 11001-03-06-000-2014-00174-00) se señala que *“la función administrativa de inspección comporta la facultad de solicitar información de las personas objeto de supervisión, así como de practicar visitas a sus instalaciones y realizar auditorías y seguimiento de su actividad; la vigilancia, por su parte, está referida a funciones de advertencia, prevención y orientación encaminadas a que los actos del ente vigilado se ajusten a la normatividad que lo rige; y, finalmente, el control permite ordenar correctivos sobre las actividades irregulares y las situaciones críticas de orden jurídico, contable, económico o administrativo”.*

En ese orden de ideas, las nociones de inspección, vigilancia y control cuentan con una definición jurisprudencial que permite entender hacia dónde va dirigida cada una de ellas. La inspección le permite al ente de control solicitar información, verificar documentación o incluso practicar visitas a las personas objeto de la supervisión. La vigilancia se refiere al seguimiento que hace la autoridad sobre la

¹³ C. Const. Sent. C-570, jul. 18/2012. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

persona vigilada, los cuales incluyen la advertencia, prevención y orientación para que estas ajusten su actividad a la ley. El control consiste en la facultad de ordenar correctivos sobre aquellas actividades que no sean ajustadas a derecho.

Ahora bien, al hacer un examen del ordenamiento jurídico en materia de reestructuraciones de la administración pública, de cara a las funciones inspección, vigilancia y control, se pone de presente los criterios que deben ponderarse para justificar la necesidad de la redistribución funcional de competencias en la administración pública. Estos criterios son racionalidad, eficiencia y armonía de la administración, los tres contenidos en el artículo 54 de la Ley 489 de 1998, de los cuales se puede destacar:

- El criterio de *racionalidad* en términos de Schmidt-Aßman se relaciona con lo siguiente:

“Todo propósito de juridificación ha de llevarse a cabo con plena conciencia de que el Derecho tiene una capacidad limitada como instrumento de dirección, cuestión ésta que quedó ya clara cuando se hizo referencia a la vinculación de la Administración al Derecho. En la labor de juridificación se ha de partir por reconocer que la actividad administrativa no está guiada únicamente por parámetros jurídicos, sino asimismo por otras directrices u “orientaciones normativas”, tales como, por ejemplo, los principios administrativos de eficiencia, flexibilidad y búsqueda del consenso y la adhesión del destinatario (vid. 6/82-88). La suma de estos parámetros conforma lo que en sentido amplio se puede denominar racionalidad de la actuación administrativa”¹⁴.

- El criterio de *eficiencia* remite al principio de economía (artículo tercero de la Ley 1437 de 2011), según el cual las autoridades deben proceder con austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas.
- Conforme al criterio de *armonía*, las actuaciones administrativas deben garantizar armonía, coherencia y articulación entre las actividades que realicen cada una de

¹⁴ De acuerdo a un autor de referencia en la doctrina alemana: Eberhard Schmidt-Aßman. La teoría general del derecho administrativo como sistema. Objeto y fundamentos de la construcción sistemática. Madrid-Barcelona, Instituto Nacional de Administración Pública-Marcial Pons, 2003. Pg. 64.



César Augusto Lorduy Maldonado
Representante a la Cámara por el Dpto. del Atlántico

las dependencias, de acuerdo con las competencias atribuidas por la ley, para efectos de la formulación, ejecución y evaluación de sus políticas, planes y programas, que les permitan su ejercicio sin duplicidades ni conflictos. También hace parte de este criterio de armonía la regla que indica que cada una de las dependencias tendrá funciones específicas pero todas ellas deberán colaborar en el cumplimiento de las funciones generales y en la realización de los fines de la entidad u organismo (artículo 54 de la Ley 489 de 1998, literales e y f). En virtud del principio de coordinación (que también hace parte del criterio de armonía) las autoridades concertarán sus actividades con las de otras instancias estatales en el cumplimiento de sus cometidos y en el reconocimiento de sus derechos a los particulares.

La propuesta concreta de redistribución funcional de competencias de la potestad inspectora y sancionatoria sobre las cámaras de comercio debe entonces justificarse desde los criterios de eficiencia, racionalidad y armonía. La redistribución funcional debe tener en cuenta el criterio de la Corte Constitucional según el cual la estructura debe adaptarse a la función para lograr una administración dinámica y eficaz¹⁵.

De acuerdo con el criterio de racionalidad, las medidas que se tomen en la administración pública deben ser coherentes con el contexto y el entorno para que reporten beneficios en el desarrollo de las funciones que se encuentran a cargo de las distintas entidades y organismos. La división sectorial de los sujetos vigilados entre la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia de Industria y Comercio obedece a criterios funcionales, es decir, una sociedad comercial es vigilada en diferentes aspectos por las dos superintendencias. La Superintendencia de Sociedades tiene una competencia *general y residual* de acuerdo con el Decreto 1023 de 2012, pues debe vigilar el funcionamiento de las sociedades en el desarrollo de su objeto social para que se ajusten a la ley y los estatutos, y ejerce la vigilancia de cualquier sociedad que no se encuentre vigilada por cualquier otra superintendencia. La Superintendencia de Industria y Comercio por su parte, tiene unas facultades de inspección, vigilancia y control para garantizar el cumplimiento de las normas cuya observancia le ha sido atribuida por el ordenamiento jurídico sin distinción a si son sociedades o no, y que en ese sentido, se encuentran más relacionadas con la protección de los mercados y el comercio. Así las cosas, las

¹⁵ Sentencia C-089A/94. “La Corte debe insistir en el hecho de que debe ser la estructura la que se adapte a la función y no al contrario, esto es, que la función se vea obligada a amoldarse a la estructura. Sólo de esta forma se logra una administración dinámica y eficaz, que responda a las exigencias de la sociedad y las nuevas responsabilidades que la Carta, la ley y los mismos gobernantes le asignan a las entidades del Estado”.

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Cra 7 No. 8-68 Edificio Nuevo del Congreso. Oficina 419-420 Teléfono: 4325100 Ext. 3455 - 3456

Email: clorduym@gmail.com - cesar.lorduy@camara.gov.co



Cesar Lorduy



@clorduy



@clorduym



César Augusto Lorduy Maldonado
Representante a la Cámara por el Dpto. del Atlántico

competencias a cargo de esta última autoridad administrativa, salvo lo que tiene que ver con la vigilancia a cámaras de comercio, no se relacionan con los requisitos de “*existencia*”, “*funcionamiento*” o el “*control social*” de las personas jurídicas.

Particularmente, la Superintendencia de Sociedades puede tener una comprensión más global e integral de las personas jurídicas que vigila, mientras que la Superintendencia de Industria y Comercio tiene una comprensión especializada y fragmentada. Agregado a esto, la Superintendencia de Sociedades tiene competencias que hacen de las sociedades el objeto central de sus funciones; la Superintendencia de Industria y Comercio, por su parte, tiene funciones que enfatizan en momentos específicos, tales como el equilibrio en las relaciones de consumo y la protección a la competencia. Así las cosas, la Superintendencia de Sociedades ostenta un conocimiento más integral sobre las personas jurídicas (cómo es el caso de las Cámaras de Comercio) y por lo tanto, puede ejercer con más coherencia las funciones de inspección, vigilancia y control de las cámaras de comercio.

Por otra parte, en atención al criterio de eficiencia, el uso de los recursos de la administración pública debe ser optimizado de tal manera que se alcancen los mejores resultados. Existen varias razones para pensar que la Superintendencia de Sociedades se encuentra en una situación institucional que presta la mayor eficiencia dentro del sector administrativo para ejercer las funciones de inspección, control y vigilancia sobre las Cámaras de Comercio y fortalecer su institucionalidad y función social. En esencia, la Superintendencia de Sociedades: (i) promueve de manera más dinámica el gobierno corporativo, (ii) tiene un acceso más continuo a información útil para ejercer la función de vigilancia, inspección y control de las Cámaras de Comercio, y (iii) tiene mejor disposición institucional en la geografía nacional.

Así las cosas, se destaca que la Superintendencia de Sociedades tiene una experiencia acumulada en la formación de valores y procedimientos de gobierno corporativo que puede ser funcional en los órganos de dirección de las Cámaras de Comercio. Según el plan estratégico de la Superintendencia de Sociedades para el periodo 2018–2022, la entidad busca fomentar empresas competitivas, productivas y perdurables a través del fortalecimiento institucional de las sociedades y de su gobierno corporativo. Este enfoque es posible debido a que la autoridad administrativa tiene como función pública la inspección, control y vigilancia, de las sociedades comerciales del país, razón por la cual existe una importante curva de aprendizaje acumulada en esta entidad respecto a la verificación de cumplimiento (*compliance*) de las reglas y los valores del gobierno corporativo. En ese sentido, la

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Cra 7 No. 8-68 Edificio Nuevo del Congreso. Oficina 419-420 Teléfono: 4325100 Ext. 3455 - 3456

Email: clorduym@gmail.com - cesar.lorduy@camara.gov.co



Cesar Lorduy



@clorduy



@clorduym



César Augusto Lorduy Maldonado
Representante a la Cámara por el Dpto. del Atlántico

ética del gobierno corporativo es fundamental para el correcto funcionamiento de las cámaras de comercio, así como es fundamental en las sociedades comerciales.

Las cámaras de comercio desempeñan sus funciones dentro de un ámbito delimitado de territorio, el cual puede comprender varios municipios, dentro del el cual se encuentran ubicadas sus sedes¹⁶. Esto conlleva a que la ubicación geográfica de las cámaras de comercio dependa del sector en donde ejercen jurisdicción. Al analizar la competencia de las superintendencias en cuestión se observa que ambas ejercen su función a nivel nacional. Sin embargo, la presencia de cada una se lleva a cabo de manera diferente, con un impacto directo en su capacidad y efectividad para ejercer la inspección, vigilancia y control.

Ahora bien la Superintendencia de Sociedades, dentro de su estructura administrativa cuenta con Intendencias Regionales: Intendencia Regional de Medellín (Departamentos de Antioquia y Chocó); Intendencia Regional de Cali (Departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo); Intendencia Regional de Barranquilla (Departamentos del Atlántico, Cesar, Guajira y Magdalena); Intendencia Regional de Cartagena (Departamentos de Bolívar, Córdoba, Sucre y San Andrés y Providencia); Intendencia Regional de Manizales (Departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda); Intendencia Regional de Bucaramanga (Departamentos de Santander, Norte de Santander y Arauca)¹⁷.

Estas Intendencias pueden: (i) ejercer la inspección, vigilancia y control sobre las sociedades comerciales, sucursales de sociedades extranjeras, empresas unipersonales y cualquier otro sujeto que determine la ley, para lo cual dirigirá y coordinará las actuaciones administrativas necesarias para el cumplimiento de estas atribuciones; (ii) velar por el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a la entidad y por el eficiente desempeño de las funciones técnicas y administrativas de la misma; (iii) solicitar la información que se requiera para conocer o para evaluar la situación jurídica, contable, económica o administrativa de cualquier sociedad no vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia o sobre operaciones específicas de la misma; (iv) imponer multas, sucesivas o no, a quienes incumplan las órdenes de la Superintendencia de Sociedades, quebranten las leyes o sus propios estatutos, de conformidad con los criterios fijados por el Superintendente; (v) realizar las investigaciones administrativas de las sociedades con el fin de evitar, interrumpir o sancionar la comisión de abusos por parte de los órganos sociales y el suministro de información que no se ajuste a la

¹⁶ D. 1074/2015, art. 2.2.2.38.1.2 y 2.2.2.38.1.3.

¹⁷ Superintendencia de Sociedades. Res. 100-001106, mar. 31/2020.

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Cra 7 No. 8-68 Edificio Nuevo del Congreso. Oficina 419-420 Teléfono: 4325100 Ext. 3455 - 3456

Email: clorduym@gmail.com - cesar.lorduy@camara.gov.co



Cesar Lorduy



@clorduy



@clorduym



César Augusto Lorduy Maldonado
Representante a la Cámara por el Dpto. del Atlántico

realidad; y (vi) realizar la práctica de investigaciones administrativas a las sociedades no vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, y sobre las que, de conformidad con la ley, la Superintendencia de Sociedades asume la competencia¹⁸.

En ese orden de ideas, resultaría más eficiente si el ejercicio de la facultad de inspección, vigilancia y control sobre las cámaras de comercio, se ejerciera por la Superintendencia de Sociedades, a través de sus Intendencias.

Finalmente, el criterio de armonía hace énfasis en la disposición de la articulación interna de las dependencias de la entidad para asumir una función administrativa. Conforme a esto, las actividades a cargo de las dependencias deben ser coherentes con las funciones generales de la entidad y con las funciones específicas de las dependencias de tal manera que no existan duplicidades ni conflictos. El cumplimiento del criterio de armonía permite a su vez la coordinación con otras autoridades.

La Delegatura para la Protección de la Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, es el área encargada de la investigación de las conductas restrictivas de la competencia y de las facultades correctivas para lograr la eficiencia económica de los mercados; sin embargo, en la actualidad la inspección, vigilancia y control de las cámaras de comercio se realiza por una dependencia de dicha delegatura, la cual es la Dirección de Cámaras de Comercio. Esto es producto de la reestructuración de la Entidad con ocasión al Decreto 4886 de 2011.

Particularmente, la Dirección de Cámaras de Comercio asumió directamente las funciones relacionadas con cámaras de comercio que con anterioridad ejercía la Delegatura de Protección de la Competencia de manera directa. Aparece en este punto una inconformidad del criterio de armonía porque la actividad de vigilancia, inspección y control de la libre competencia no tiene proximidad funcional a la vigilancia, inspección y control de las cámaras de comercio. Situación que se debe a que ningún área o dependencia de la Superintendencia de Industria y Comercio tiene afinidad funcional con la vigilancia, las cámaras de comercio.

En el caso de la Superintendencia de Sociedades, según la estructura dispuesta por el Decreto 1023 de 2012, hay una Delegatura exclusivamente para ejercer la inspección, vigilancia y control sobre las sociedades comerciales. Esta Delegatura a su vez cuenta con dos dependencias, la Dirección de Supervisión de Sociedades

¹⁸ *Ibidem*



César Augusto Lorduy Maldonado
Representante a la Cámara por el Dpto. del Atlántico

y la Dirección de Supervisión de Asuntos Especiales y Empresariales. Estas coordinan la aplicación de la política de supervisión por parte de las Intendencias Regionales, que a su vez ejercen funciones de inspección, vigilancia y control de las entidades del área de su jurisdicción.

En orden de lo expuesto, es correcto decir que la Superintendencia de Sociedades cuenta con mejor disposición estructural y funcional para asumir la inspección, vigilancia y control de las cámaras de comercio, tras haber verificado los criterios de racionalidad, eficiencia y armonía.

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Cra 7 No. 8-68 Edificio Nuevo del Congreso. Oficina 419-420 Teléfono: 4325100 Ext. 3455 - 3456

Email: clorduym@gmail.com - cesar.lorduy@camara.gov.co



Cesar Lorduy



@clorduy



@clorduym